



GOBERNADOR DE PUERTO RICO

Pedro R. Pierluisi

4 de abril de 2022

Hon. José Luis Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico

TRAMITES Y RECORDS SENADO P

RECIBIDO ABR 5 22 PM 3:48

Re: Proyecto del Senado 208

Estimado señor Presidente Dalmau Santiago:

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó recientemente el **Proyecto del Senado 208** (P. del S. 208), el cual tiene el siguiente propósito, según su título:

"Para añadir un inciso (k) a la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", a los fines de incluir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro de los beneficios elegibles".

Esta es una loable e importantísima pieza legislativa, para poder atender las necesidades del cuidado de salud de los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como sus familias. Sin embargo, el costo de la implantación del proyecto, según aprobado, nos parece significativamente inconsistente con el Plan Fiscal Certificado para el Gobierno de Puerto Rico.

Como parte del proceso legislativo, tanto el Departamento de Salud, como la Administración de Servicios de Salud (ASES) indicaron a la Asamblea Legislativa que este proyecto resultaría viable, siempre y cuando se identificaran fuentes de ingresos recurrentes para poder cubrir este beneficio. Dichas fuentes de repago no han sido identificadas en el lenguaje que ha llegado a mi consideración. En el trámite legislativo tampoco se da cuenta de ese impacto fiscal, tal y como lo requiere la Ley 103-2006, según enmendada por la Ley 53-2021.



GOBERNADOR DE PUERTO RICO

Pedro R. Pierluisi

Más puntualmente, la población que añadiría este proyecto de ley no es una reconocida por el gobierno federal bajo el Programa de Medicaid, por lo que habría que sufragar su costo con fondos estatales asignados al Plan de Salud del Gobierno. La consecuencia natural de esta determinación sería el eliminar recursos del Plan Vital, que actualmente sirven para atender las necesidades de otras poblaciones, para poder cubrir los costos de este nuevo mandato legislativo. Esto sería demasiado oneroso para el Estado, no sólo en su aspecto financiero, sino en términos de la escasez de servicios de salud, para poblaciones más vulnerables.

Además de todo lo anterior, ASES nos ha planteado que existe la posibilidad de poder realizar este mandato de ley, por la vía administrativa, una vez se den las condiciones y los estudios actuariales correspondientes. Por lo tanto, con esta comunicación estoy instruyendo tanto al Departamento de Salud como a ASES para que realicen las tareas correspondientes para poder lograr la intención legislativa de este proyecto, una vez se identifique el costo y los recursos recurrentes para poder cubrir este nuevo gasto gubernamental.

Por todo lo anterior, le comunico que he decidido impartir un veto expreso al **Proyecto del Senado 208**.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Pierluisi", is written over a light blue circular stamp.

C. Hon. Carlos Mellado
Secretario del Departamento de Salud

(P. del S. 208)

LEY

Para añadir un inciso (k) a la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de incluir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro de los beneficios elegibles.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el deber y la responsabilidad de garantizar, a través de su gestión, el progreso, la salud, el bienestar y la prestación de servicios al pueblo que logren garantizar la calidad de vida y viabilizar la dignidad humana. A estos fines, el gobierno central provee un andamiaje de recursos y personal capacitado. Son ellos, nuestros servidores públicos, el mejor recurso para que el pueblo reciba los servicios esenciales los que a su vez sostengan su calidad de vida y afiancen las garantías democráticas que establece nuestra Carta Magna.

Precisamente, uno de los renglones indispensables dentro del servicio público es aquel correspondiente a la seguridad pública como garante de paz y estabilidad social, así como el respeto al fundamento de nuestras leyes. En especial, aquellos que, desde el ámbito correccional, son instrumentales para que el transgresor de la ley cumpla bajo condiciones de protección, custodia y rehabilitación, las condiciones impuestas por el Poder Judicial para extinguir el pago de la condena que supone por actuar en contra de esta.

El Cuerpo de Oficiales de Custodia es la primera línea para el cumplimiento de la misión que se le delega al aparato correccional. Son estos oficiales los responsables de mantener el orden institucional en el sistema carcelario. Asimismo, brindar de forma segura y accesible los servicios de albergue, salud y alineación para todos los confinados; además, proveer con su disciplina el ejemplo de rectitud e integridad necesarios. En este aspecto, los oficiales de custodia son uno de los héroes anónimos que permiten la funcionabilidad del Gobierno, la protección de la ciudadanía mediante la custodia correccional y la reinserción a la comunidad de aquellos que, en el cumplimiento de su condena, han participado de programas de rehabilitación que les permite enfrentar un nuevo futuro.

Lamentablemente, en el ejercicio de su labor, los oficiales correccionales solo cuentan con su temple y autoridad como única arma dentro de las instituciones penales, donde numéricamente se encuentran en desventaja. Por otra parte, sus condiciones de trabajo,

más allá de ser onerosas y de gran responsabilidad, requieren de su presencia diaria y su salario no es suficiente para compensar por la labor y los sacrificios que realizan.

Ante esta sobresaliente muestra de responsabilidad y heroísmo, esta Asamblea Legislativa debe ser proactiva en defender a aquellos que, no importa qué, defienden a nuestra ciudadanía a diario. Esto incluye, entre otras cosas, procurar una mejor vida para ellos y cuidar por su salud, ya que en la actualidad estos se encuentran excluidos de los beneficios del plan de salud del Gobierno.

Ante esta situación, esta Asamblea Legislativa, en defensa de nuestros oficiales de custodia, debe actuar de manera contundente y responsable con el propósito de garantizarle a estos servidores públicos, y las familias que de ellos dependen, la accesibilidad inmediata a los mejores servicios de salud y a los beneficios que contiene el plan de salud del Gobierno. Solo así podremos comenzar a hacerle justicias a estos oficiales de custodia que hacen malabares con su salario y anteponen su bienestar y el de sus familias, por el bienestar general de nuestro pueblo, mientras el Gobierno les exige continuamente las mayores cualidades de carácter y solvencia moral, y les impone condiciones riesgosas a diario.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se añade un inciso (k) a la Sección 3 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Sección 3.- Beneficiarios del Plan de Salud.

Todos los residentes de Puerto Rico podrán ser beneficiarios del Plan de Salud que se establecen por la implantación de esta Ley, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos, según corresponda:

(a) ...

(b) ...

(c) ...

...

(k) Los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, sus cónyuges e hijos menores de edad. Este beneficio se mantendrá vigente cuando el Oficial de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación falleciere por cualquier circunstancia, mientras el cónyuge superviviente permanezca en estado de viudez y los hijos sean menores de veintiún (21) años de edad o aquellos mayores hasta de veinticinco (25) años de edad, que se encuentren cursando sus estudios postsecundarios. El Departamento de Corrección y Rehabilitación consignará en su presupuesto de gastos los fondos para mantener vigente el plan de salud para estos beneficiarios, mediante una aportación equivalente a la aportación patronal que recibía el miembro del Cuerpo de Oficiales

de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación al momento de fallecer para beneficios de salud.

En caso del fallecimiento del Oficial de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, esta se le deberá notificar al cónyuge supérstite y/o a los dependientes menores de edad, sobre su derecho a continuar disfrutando del beneficio de la Tarjeta de Salud, y éstos vendrán en la obligación de aceptar o rechazar el mismo mediante un endoso por escrito.

(1). - Los referidos beneficiarios tendrán un término de noventa (90) días para notificar su aceptación o rechazo del beneficio y dentro del referido término de noventa (90) días no se podrá efectuar ningún cambio en los beneficios del plan de salud, a menos que se reciba la contestación antes de expirado en el referido término.

(2).- El Departamento de Corrección y Rehabilitación vendrá obligados a notificar al Departamento de Salud cualquier cambio en el beneficio del plan de salud de los dependientes de un oficial de custodia que muera en el cumplimiento del deber. Se dispone que el Programa de Asistencia Médica vendrá obligado a notificar al o a los dependientes del oficial de custodia que falleció los derechos que le asisten bajo esta Ley."

Artículo 2.- El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Director Ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico deberán tomar las medidas necesarias para el fiel cumplimiento con esta Ley.

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.